



**FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO**

**GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS**

***LA DEPURACIÓN FUNCIONARIAL EN EL  
RÉGIMEN FRANQUISTA***

**TRABAJO DE FIN DE GRADO**

**CURSO ACADÉMICO 2017/2018**

**ALUMNO: JUAN MARÍA ROLDÁN CONESA**

**TUTOR: PROF. DR. SEVERIANO FERNÁNDEZ RAMOS**

**Cádiz, julio 2018**

## ÍNDICE

<b>1.-INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....</b>	<b>6</b>
2.1.- Sublevación militar.....	6
<b>3.-INICIO DE LA DEPURACIÓN.....</b>	<b>6</b>
3.1.- Periodo 1936-1939.....	6
3.2.- Periodo 1939-1975.....	9
<b>4.-REGULACIÓN.....</b>	<b>10</b>
4.1.- Fundamentación legislativa.....	10
4.2.- Principales disposiciones de la depuración funcionarial.....	10
<b>5.-FUNDAMENTOS DE LA DEPURACIÓN.....</b>	<b>13</b>
5.1.- Verificación de lealtad al Régimen.....	13
5.2.- Homogeneidad político-burocrática del Estado.....	15
<b>6.-PARTICULARIDADES DE LOS PROCESOS.....</b>	<b>16</b>
6.1.- Documentación y credenciales.....	16
6.2.- Revisiones.....	18
6.3.- Ratificaciones.....	18
6.4.- Acreditación de avales.....	20
6.4.1.- Organismos comisionados para la inspección de avales.....	21
6.4.2.- Mercado ilegal de avales.....	22
6.4.3.- Efectos y represión del mercado ilegal de avales.....	23
6.5.- Funcionarios delatores.....	24
<b>7.-PRINCIPALES SECTORES DEPURADOS.....</b>	<b>25</b>
7.1.- Justicia.....	25
7.2.- Maestros.....	26
7.3.- Correos.....	28

7.4.- Ferrocarriles.....	29
<b>8.-FUNCIONARIAS Y DEPURACIÓN.....</b>	<b>31</b>
8.1.- Depuración por razones políticas.....	31
8.2.- Depuración por razón de sexo.....	32
8.3.- Limitaciones.....	33
8.4.- Consecuencias de la depuración para las funcionarias.....	34
<b>9.-CONSECUENCIAS DE LA DEPURACIÓN.....</b>	<b>34</b>
9.1.- Sanciones.....	34
9.1.1.- Leves.....	35
9.1.2.- Graves.....	36
9.1.3.- Muy graves.....	36
<b>10.-REVISIONES DE LAS CONSECUENCIAS DE LA DEPURACIÓN....</b>	<b>36</b>
10.1.- 1953. Reapertura de expedientes.....	36
10.2.- Motivación de las revisiones.....	37
<b>11.-DEROGACIÓN DE LA LEY DE DEPURACIÓN.....</b>	<b>37</b>
11.1.- Derogación oficial.....	37
11.2.- Efectos de la derogación.....	38
<b>12.-CONCLUSIONES.....</b>	<b>38</b>
<b>13.-EPÍLOGO.....</b>	<b>41</b>
<b>13.-BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>42</b>
<b>14.-ANEXOS.....</b>	<b>44</b>

## **RESUMEN**

Durante la década de los años 30 del siglo XX, España se encontraba sumergida en una profunda crisis institucional y económica debido a la poca consistencia de los gobiernos republicanos. El frustrado proceso de modernización que intentaron algunos sectores de la sociedad española, se encontró con las continuas protestas obreras y campesinas, lo que provocó que el malestar social creciera hasta extremos peligrosos. Motivados por este desorden, un grupo de militares encabezados por el General Franco decidió dar un golpe de Estado contra el gobierno republicano, lo que desencadenó finalmente en la Guerra Civil española. Este Trabajo de Fin de Grado analiza y describe haciendo un repaso a la historia relativamente reciente de España las consecuencias que tuvo para los funcionarios y empleados públicos dicho enfrentamiento y la posterior victoria del bando insurrecto hasta la entrada en vigor de la actual democracia.

**PALABRAS CLAVE:** Régimen franquista, Funcionario público, Depuración, Empleado público, Sanción, Órganos depuradores.

## **ABSTRACT**

During the Decade of the thirties of the 20th century, Spain was submerged in a deep institutional and economic crisis due to the low consistency of Republican Governments. The frustrated modernization process that tried to some sectors of Spanish society, met with continual protests, worker and peasant, prompting social unrest to grow to dangerous extremes. Motivated by this disorder, a group of soldiers led by General Franco decided to give a coup against the Republican government, which finally unleashed in the Spanish Civil War. This degree thesis analyzes and describes making a review of the relatively recent history of Spain what had for civil servants and public employees that confrontation and subsequent victory of the insurgent side until the entry in force of the current democracy.

**KEYWORDS:** Franquista regime, Civil servants, Depuration, Public employee, Sanction, Purifying organs.

## **1.- INTRODUCCIÓN.**

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), tiene por objetivo analizar el proceso de depuración realizado por la dictadura franquista sobre los empleados públicos. Este trabajo se ha enfocado desde una perspectiva histórico-jurídica y pretende investigar sobre el pasado reciente de este colectivo de trabajadores y examinar las circunstancias, procedimientos y consecuencias de dicha criba. La elección de este tema de investigación está vinculado al interés sobre el funcionariado público transmitido en la Asignatura de Régimen Jurídico del Empleado Público impartida en el 4º curso del Grado, como asignatura optativa.

El funcionario público en España ha experimentado situaciones y vicisitudes muy diversas a lo largo de su historia, desde su primer reconocimiento, con la entrada en vigor del Estatuto de Bravo Murillo de 1852<sup>1</sup>, - primer Estatuto General de la función pública española-, hasta la actualidad.

Una característica intrínseca de la figura del empleado público es, que su labor se desarrolla en relación a las diferentes situaciones políticas, económicas y sociales de cada época. No obstante, las circunstancias que padeció esta institución en España desde el año 1936 hasta la segunda mitad de la década de los años 60, no es comparable a otras situaciones acaecidas en el pasado, ni en la actualidad.

Durante este periodo de tiempo se produjo la depuración sistemática de todos los cuerpos de funcionarios y empleados públicos de las diferentes Administraciones del Estado.

Al hilo de esta aseveración, se podría argumentar por una parte, que la depuración política acometida por el nuevo Estado franquista obedeció únicamente a motivaciones ideológicas, pero por otra, se cuestiona el hecho de que también fueron depurados funcionarios adeptos al nuevo régimen.

Para la realización de este trabajo se ha consultado la legislación afecta al tema, revisado la bibliografía existente y la documentación histórica pertinente. Al existir tanta cantidad de información sobre este acontecimiento histórico, el presente estudio es un esbozo de lo que podría ser un futuro proyecto de investigación de mayor ambición.

---

<sup>1</sup> Gaceta de Madrid. Nº 6572 de 20 de junio de 1852.

## **2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.**

### **2.1.- Sublevación militar.**

En medio de un clima de violencia y desafío a la legalidad, se celebraron en el mes de febrero de 1936 en España, las terceras elecciones generales de la Segunda República Española<sup>2</sup>. Éstas concluyeron con la victoria de la coalición de izquierdas denominada Frente Popular<sup>3</sup>. Los resultados electorales fueron similares para los dos bloques principales, existiendo una continua sospecha sobre el recuento de los sufragios.

A tenor de estos resultados, puestos en duda por el bando de los liberales, conservadores, radicales de derecha y seguidores del CEDA<sup>4</sup>, los cuales no estaban dispuestos a perder el poder ni los privilegios que habían gozado siempre en España, junto con la inestabilidad social, política y económica que se produjo en España a lo largo de 1936, motivada por el triunfo electoral de los partidos de izquierdas, hicieron de este, el escenario perfecto para que se llevara a cabo una sublevación.

El 18 de julio de 1936, tras el fracaso parcial de un golpe de Estado llevado a cabo por el Ejército contra el gobierno legítimo y democrático de la Segunda República, se inició la Guerra Civil en España.

## **3.- INICIO DE LA DEPURACIÓN.**

### **3.1.- Periodo 1936 – 1939.**

Diez días después de iniciada la sublevación, el 28 de julio de 1936 se firma el Bando conjunto de declaración del Estado de Guerra de la Junta de Defensa Nacional de España (JDNE)<sup>5</sup>, donde se ordenaba a todos los funcionarios que debían prestar auxilio inmediato para restablecer el orden o ejecutar lo mandado en dicho Bando, bajo pena de ser suspendidos de sus cargos con la consiguiente responsabilidad criminal que les sería exigida por la jurisdicción de Guerra.

---

<sup>2</sup>Celebradas los días 16 y 23 de febrero de 1936.

<sup>3</sup>Coalición formada por Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Comunista de España, Partido Obrero de Unificación Marxista y Partido Sindicalista.

<sup>4</sup>Confederación Española de Derechas Autónomas. Coalición española de partidos católicos y de derechas durante la etapa de la Segunda República.

<sup>5</sup>Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 3 de 30 de julio de 1936.

Acto seguido, el 19 de agosto de 1936, una Orden de la JDNE<sup>6</sup>, dictó normas para rehabilitar la normal actividad de las Administraciones del Estado. Esta Orden tenía como finalidad derogar el Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República<sup>7</sup>, donde cesaba a todos los funcionarios del Estado y empleados públicos. En esta fecha dio comienzo la depuración funcionarial en algunos lugares de España donde la sublevación militar se había desarrollado sin incidentes graves.

Al mismo tiempo que se asentaban las bases y fundamentos de la depuración, al nuevo Régimen se le planteó una controversia de compleja solución en lo que se refería a quiénes serían los encargados de instruir y juzgar los expedientes. Inicialmente, de estos menesteres se encargaban las autoridades militares, debido a la premura de la situación y la necesidad de asumir el gobierno del Estado. Esta circunstancia dio lugar a una ingente cantidad de ceses y juicios sumarísimos sin ninguna opción de alegación ni defensa por parte de los enjuiciados.

Con el fin de iniciar los procesos depuradores y ejecutar las normas que se habían dictado y se dictarían en el futuro, lo primero que hizo el bando sublevado fue depurar el estamento judicial.

Por tal razón, antes de obligar a los funcionarios de Justicia a su reincorporación, la JDNE dictó, el 2 de septiembre de 1936, un Decreto donde daba potestad ilimitada a Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales por la que podrían destituir, sin sujeción a las normas vigentes, a los jueces y fiscales municipales desafectos, cuya actuación se considerara poco patriótica o contraria al Movimiento Nacional. Como resultado del Decreto, se nombraron nuevos jueces, fiscales y abogados provenientes del ejército, incluso retirados del servicio, con la finalidad de asegurar el control de las Audiencias Provinciales.

La aplicación de este nuevo Decreto, dio lugar a corto y medio plazo a una depuración vehemente hacia los funcionarios de la Administración de Justicia, en especial, jueces y fiscales que hubieran permanecido durante el inicio de la guerra en la zona republicana, periodo de muy intensa politización de la sociedad a todos los niveles.

---

<sup>6</sup> Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 9, Burgos, 21 de agosto de 1936.

<sup>7</sup> Gaceta de Madrid, núm. 204 de 22 de julio de 1936. Decreto de 21 de julio.

Simultáneamente se facultó a las autoridades provinciales y locales de potestad suficiente para dictar edictos y bandos, que a su criterio estimasen oportunos para llevar a buen término la tarea encomendada.

No obstante, transcurrido un periodo de tiempo prudencial y debido a la falta de preparación de los Tribunales para este tipo de cometidos, el régimen decidió dar a estos sumarios un cierto halo de seguridad jurídica, designando jueces especiales con dedicación exclusiva y especializada en las diferentes áreas de la Administración.

Resultaba inverosímil que una cantidad notable de estos nuevos jueces no eran jueces con anterioridad al 18 de julio, su nuevo cargo se debía a una exagerada adhesión al régimen franquista.

En tal sentido, el 3 de septiembre, por medio del Decreto núm. 101 de dicha Junta, se obligó a que todos los funcionarios y empleados públicos se reincorporasen a sus puestos. Solo estaban exentos de dicha exigencia los funcionarios que estuvieran combatiendo en el bando insurrecto. Cualquier otra circunstancia que motivase su no incorporación, sería tomada como un acto de rebelión a la Causa y declarados culpables sin necesidad de formar ningún tipo de expediente. Los funcionarios que en el momento de la sublevación estuvieran en el bando republicano deberían presentarse en un plazo de diez días desde la toma de la plaza por las tropas sublevadas.

Posteriormente, el 1 de octubre de 1936 se firmó la Ley de Estructuración del nuevo Estado español, por la cual se creó la Junta Técnica del Estado, con la finalidad de reestructurar el Régimen franquista y la Administración del Estado.

Debido a que los procesos de depuración se estaban desarrollando de manera desigual por falta de uniformidad en su normativa, se fijaron unas bases mínimas sobre la misma, para lo cual se dictó un Decreto Ley el 5 de diciembre<sup>8</sup>, donde se regulaba la normativa provisional del saneamiento funcional. Es destacable reseñar que en dicha orden se manifestaba, que no cabía impugnación sobre las resoluciones dictaminadas, dando lugar a evidentes casos de indefensión por parte de los funcionarios depurados.

Aunque las bases anteriormente mencionadas supusieron una relativa homogeneidad a la hora de su aplicación, aun mostraban suficientes carencias en relación con las expectativas de depuración que pretendía el Régimen. Fue por ello que,

---

<sup>8</sup>Boletín Oficial del Estado núm. 51 de 9 de diciembre de 1936. Decreto ley de 5 de diciembre del Gobierno del Estado dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados.



se dictaron durante los años 1937 y 1938, una gran cantidad de decretos, órdenes y bandos, los cuales perfeccionaban extraordinariamente las intenciones de la depuración.

Dicha depuración comienza formalmente en febrero de 1939, casi dos meses antes de la finalización de la guerra<sup>9</sup>, con la proclamación de la Ley de 10 de febrero de 1939<sup>10</sup>, que establecía normas para la depuración de funcionarios públicos.

Esta Ley es considerada el pilar fundamental de toda la normativa de carácter depurativo, estando toda la legislación anterior y posterior a su entrada en vigor, supeditada a dicha norma en relación con la depuración.

### **3.2.- Periodo 1939 – 1975.**

Durante esta etapa, se produjeron varias fases claramente diferenciadas que muestran el desarrollo de la depuración.

En primer lugar, desde 1939 hasta 1943, considerado este, el periodo más activo en lo que a la depuración se refiere. En esta época son depurados la práctica totalidad de los funcionarios y empleados públicos, en particular, los adscritos a cualquier Ministerio, con especial intensidad los dependientes de las carteras de Justicia, Gobernación y Educación.

Resultaba evidente que el régimen tenía la convicción de que en la Administración Central del Estado era donde existía la mayor cantidad de posibles infieles a la Causa. El motivo primordial de esta sospecha se basaba en que los funcionarios que iban a ser depurados habían estado al servicio del anterior gobierno y posiblemente hubieran sido aleccionados con ideas republicanas.

Aunque la depuración de los empleados públicos de las Administraciones Locales se había iniciado en el periodo anterior, fue a partir de 1943, cuando se analizaron con más celo y desconfianza sus expedientes.

Este nuevo razonamiento estaba fundado esencialmente en dos consideraciones, por una parte, la cercanía de estos funcionarios con la población, y por otra, la vulnerabilidad a la inobservancia de los dictados de lealtad a los principios del Estado, debido a las carestías existentes en ese momento y que hacían a los funcionarios locales

---

<sup>9</sup> Finalizó el 18 de julio de 1936.

<sup>10</sup> Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 14 de febrero de 1939. Ley de 10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración de funcionarios públicos.

merecedores de la sospecha de ayudar a los enemigos de la patria a cambio de donaciones económicas o de otra índole de dudosa legalidad.

En 1951, pasados los primeros años de organización y estructuración del nuevo sistema, se inició una revisión de los expedientes depurados y sancionados. Posteriormente en 1966 se derogó oficialmente la Ley de Depuración, aunque oficiosamente continuo en vigor hasta 1975.

#### **4.-REGULACIÓN NORMATIVA.**

##### **4.1.- Fundamentación legislativa.**

El nuevo Régimen en su intención de dar un falso prestigio a la labor depuradora funcional, encargó según su criterio de moral y ética a algunas personas dar un carácter más decoroso y civilizado a esta nueva empresa. Con este fin lo que pretendía era enmascarar las verdaderas pretensiones de la acción, ya que en lo que respecta a la regulación normativa de la depuración de funcionarios, el Régimen no escatimó esfuerzos, ni se limitó a promulgar una legislación trivial.

Desde el inicio de la sublevación, se dictaron innumerables disposiciones referentes al funcionariado, con tal motivo, fue tan extraordinario el esmero en la tarea depurativa, que se dispusieron leyes, decretos y órdenes específicas tanto a nivel nacional como a nivel local para cada cuerpo funcional, tanto por sus funciones como por su ámbito territorial.

Toda la normativa aprobada y promulgada en esta etapa franquista va a establecer un nuevo cuadro normativo sobre la organización y el funcionamiento de las distintas Administraciones Públicas. Todas estas normas eran de aplicación no solo al Estado, sino también a las instituciones provinciales, municipales y a las empresas concesionarias de Monopolios o servicios públicos.

##### **4.2.- Principales disposiciones de la depuración funcional.**

Considerando que sería una tarea demasiado extensa hacer referencia a todas y cada una de las normas dictadas en relación a la depuración funcional, a modo de síntesis, a continuación se detallaran de entre todas, las más significativas en relación con sus características coercitivas y punitivas.

En primer lugar, el General Miguel Cabanellas<sup>11</sup>, firmó el Decreto número 108 de 13 de septiembre de 1936, el cual establecía con rotundidad legal que los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrían ser corregidos, suspendidos o destituidos de los cargos que desempeñasen cuando lo aconsejasen tales medidas por sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional.

Pocas fechas posteriores, con la intención de dotar de cobertura legal al proceso represivo de los funcionarios, se dicta desde la Junta Técnica del Estado la Orden de 30 de Octubre de 1936, que contemplaba la depuración de responsabilidades políticas de los empleados públicos.

De modo accesorio para asegurar la represión de funcionarios, el 9 de febrero de 1939, entró en vigor la Ley de responsabilidades políticas<sup>12</sup>, la cual establecía los sujetos a los que se aplicaba, delitos que se castigaban y sanciones que conllevaban, así como los procedimientos a seguir y Tribunales que conocerían las causas. Esta Ley se consideraba subsidiaria de la Ley de depuración de funcionarios. Es significativo el carácter retroactivo que tenía esta ley, puesto que incluía un periodo de aplicación de casi cinco años anteriores a su publicación, exhibiendo una evidente vulneración del Principio de legalidad<sup>13</sup>, cuya esencia es *nullum crimen nulla poena sine previa lege*<sup>14</sup>.

Entre las singularidades de esta Ley, se encontraban la posibilidad de juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho, la primacía de las pruebas negativas ante las positivas y que el inculpado tenía la obligación de demostrar su inocencia.

Al margen de las Leyes Fundamentales del Reino<sup>15</sup>, la Ley de 10 de febrero de 1939, ha sido catalogada por numerosos expertos en el estudio de las leyes dictadas durante la dictadura franquista, como una de las leyes más importantes, por ser la ley fundamental de la depuración funcional, quedando todas las demás normas anteriores o posteriores promulgadas en este sentido, supeditadas a la misma, tanto por su

---

<sup>11</sup>Presidente de la Junta de Defensa Nacional, constituida en Burgos el 24 de julio del año 1936.

<sup>12</sup>Boletín Oficial del Estado. Núm. 44 de 9 de febrero de 1939. Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas.

<sup>13</sup>Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento.

<sup>14</sup>No hay delito ni pena sin ley previa.

<sup>15</sup>Conjunto de ocho leyes españolas que organizaban los poderes del Estado durante la dictadura franquista.

perfección, como por su carácter represor<sup>16</sup>. Es especialmente significativo que una norma tan exigua en lo referente a su articulado<sup>17</sup>, tuviera unas consecuencias tan gravosas para miles de personas.

A continuación, el 28 de febrero de 1939, a través de un Decreto se regulaba la depuración de los funcionarios y empleados de corporaciones y empresas concesionarias de servicios públicos.

Del mismo modo, el 28 de febrero de 1939, se dictó una Orden<sup>18</sup> por la que también quedaban sujetos a depuración, todos los patronos o miembros de fundaciones, instituciones o asociaciones benéficas, esta Orden incluía a todo el personal ya fuera administrativo, facultativo, técnico, eclesiástico, subalterno o de otro orden. Como puede apreciarse, esta Orden es la primera y única que contiene preceptos de depuración sobre la institución eclesiástica.

Después de publicadas estas normas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), e iniciada su implementación, entró en vigor la Orden de 12 de marzo de 1939<sup>19</sup>, por la que se dictaban preceptos específicos para el sector del funcionariado local. Entre sus directrices destacaba que todos los funcionarios locales serían examinados por las autoridades locales, a excepción de los cuerpos de médicos de asistencia pública, farmacéuticos, matronas y practicantes, al considerarlos funcionarios del Estado y por lo tanto su depuración se llevaría a cabo conforme a lo dictado en la ley de 10 de febrero.

Debido al resultado de la eficacia de los procesos depuradores, se dio la circunstancia de que la población funcional había decrecido de tal manera que se hizo necesario la incorporación de personal, para lo cual, en agosto de 1939<sup>20</sup>, se dictó una Ley por la que se reservaba el 80% de las plazas vacantes de la Administración franquista a los excombatientes mutilados así como a los familiares de víctimas de represión republicana.

---

<sup>16</sup>Álvaro, M. (2006). *Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo*. Centro de estudios políticos. Madrid.

<sup>17</sup>Solo contenía trece artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

<sup>18</sup>Boletín Oficial de Estado, núm. 61 de 2 de marzo de 1939. Orden sobre depuración de funcionarios y empleados de entidades benéficas.

<sup>19</sup>Boletín Oficial de Estado, núm. 74 de 14 de marzo de 1939. Orden de 12 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios de la Administración local en relación con el Movimiento Nacional.

<sup>20</sup>Boletín Oficial del Estado, núm. 244 de 25 de agosto de 1939. Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados, ex combatientes y ex- cautivos.

Posteriormente en 1956 se promulgó la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 (LRJCA), aunque esta Ley no se refiere estrictamente a la depuración funcionarial, es muy importante para el funcionariado ya que marca el comienzo de una nueva etapa. Supone un nuevo tratamiento de los cuadros administrativos y además establecía los límites de la arbitrariedad de la actuación administrativa.

## **5.-FUNDAMENTOS DE LA DEPURACIÓN.**

### **5.1.-Verificación de lealtad al Régimen.**

El Régimen franquista, según su criterio, representaba el orden y la defensa de los valores tradicionales, valores que consideraban extintos debido a la anarquía vivida durante el mandato de los ilegítimos gobiernos republicanos. A su juicio, era necesario restablecer el imperio de la ley para salvar a España, para lo cual debían acometer profundas reformas en el Estado.

Con el fin de instaurar lo anteriormente expuesto, sus principios ideológicos nucleares se basaban en diferentes fundamentos.

En primer lugar, el Nacional–militarismo. Este concepto se apoyaba en la idea de que el ejército representaba la esencia de la nación y de las virtudes frente a los políticos.

Por otra parte, el Nacional–catolicismo, justificado por la creencia de que el nuevo Régimen estaba inmerso en una “Cruzada” para salvar a España de los infieles. La Iglesia, a cambio de su fiel apoyo, fue obsequiada con múltiples privilegios, entre los que se encontraban, el control absoluto de la educación, el restablecimiento de órdenes religiosas o la exención de pagar tributos de cualquier índole al Estado.

Así mismo, el Nacional–patriotismo, donde prevalecía la unidad de España sobre otras consideraciones. El régimen rechazaba las autonomías y las lenguas de las nacionalidades históricas.

Por último, la exaltación de un líder carismático enviado por la providencia divina, el rechazo al comunismo, los partidos políticos, la democracia y las libertades individuales conformaban el elenco de sus Principios.

Este nuevo pensamiento que se fue creando en el Bando Nacional<sup>21</sup>, entendió que para poder ejercer un control absoluto sobre la ideología del pueblo español, este debía realizarse desde su base y para ello era imprescindible controlar a los principales agentes que ejecutarían esa labor. Entre estos agentes se hallaban los empleados públicos como piezas clave para esta encomienda.

Con este fin, idearon una serie de mecanismos para alcanzar sus propósitos, entre los que se encontraba la depuración del funcionariado. Una de las razones fundamentales de la depuración consistía en reeducar y controlar a los funcionarios, ya que estas dos acciones, desembocarían por un lado, en el conocimiento del nuevo ideario por parte del funcionariado y con ello alcanzar la absoluta certeza de que entre los servidores públicos no quedara ninguna posibilidad de deslealtad a la Causa y por otro, que éstos fueran el medio de transmisión a la población de los correctos y verdaderos valores del Régimen.

Según sus razonamientos, el Régimen consideraba que todas las personas que se encontraban en la zona republicana y no se hubieran adherido a la sublevación, eran delincuentes potenciales, considerando los más peligrosos a los que tuvieran la posibilidad de difundir sus ideas al resto de la población por razón de su cargo, oficio o profesión.

La represión utilizada por el Estado franquista e instrumentalizada por el poder político contra los empleados públicos para sostener y mantener un sistema estable de expectativas del régimen, se convirtió en una de las múltiples formas de violencia política, con especial repercusión entre la clase funcionarial.

Al margen del tema principal de este estudio, es preciso señalar que los empleados de empresas privadas también fueron depurados. Para acometer esta tarea se dotó a los empresarios de una potestad superior a las propias de dirección para suspender de empleo y poner a disposición de las autoridades a los trabajadores sobre los que tuvieran sospechas de ser desleales.

A modo de conclusión, el objetivo del proceso depurador no solo consistía en castigar a los desleales e insurrectos, sino en advertir a los que no estimasen seguir los

---

<sup>21</sup> Nombre con el que se autodenominaron los sublevados en el Golpe de Estado en España de julio de 1936, que contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de derechas, como la Falange Española, el Bloque Nacional, los carlistas de la Comunión Tradicionalista, la Confederación Española de Derechas Autónomas, los nacionalistas de la Liga Regionalista de Cataluña y la Iglesia Católica.

nuevos dictados marcados, de las consecuencias a las que se exponían y así quedó resumido en palabras de José María Pemán, “*el carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino también preventivo*”<sup>22</sup>.

## **5.2.-Homogeneidad político-burocrática del Estado.**

Un nuevo orden jurídico inspirado por el objetivo de reglamentar la burocracia como columna vertebral del Estado, se presentó como el sucesor de la época liberal, lo cual dió como resultado un Estado corporativista.

La dictadura franquista fue un Régimen burocrático, en el sentido de que fue un sistema político no sólo administrado, sino también dirigido por funcionarios profesionales, de cuyas capas superiores salían los miembros de la clase política, por este motivo, el sistema burocrático del Régimen concentraba tanto las decisiones políticas como la ejecución administrativa.

Igualmente, un detalle significativo según Álvarez (1984), de los gobiernos del nuevo Régimen, -en especial los que afectaron a la depuración funcional-, era que estos estaban formados casi en su totalidad por burócratas<sup>23</sup>.

Así mismo, el Régimen consideraba funcionarios no solo a los pertenecientes a los Cuerpos dependientes de la Administración parlamentaria, de la Administración de Justicia y de la Administración Civil del Estado, sino de modo idéntico, también a los Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio, con la finalidad de controlar todas las posibilidades de actuación de los distintos agentes que pudieran actuar en la esfera social, económica y administrativa del Estado y con ello asegurar el sometimiento a su Causa.

En lo que se refiere al nivel de burocratización de las distintas Administraciones durante el periodo objeto de este trabajo, es importante precisar que existían distintos niveles de control y burocratización. En función de la importancia que el Régimen daba a las mismas, aplicaba distintos niveles de control, como ejemplo, podemos citar la Administración de Justicia, que en contra de lo que se pudiera pensar por su importancia, era de las menos burocratizadas, esto era debido a que al principio de la sublevación se dotó de potestad para impartir justicia a una gran cantidad de personas

---

<sup>22</sup>José María Pemán y Pemartín, Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza en 1939.

<sup>23</sup>Álvarez, J. (1984). En su obra *Burocracia y poder político en el régimen franquista*. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, define burócrata como la persona que era miembro de un Cuerpo que para su ingreso se exigía titulación universitaria, de Escuela Técnica Superior o militar.

no doctas en la materia, lo cual conllevó que los procedimientos se hicieran de forma totalmente desigual.

A modo de conclusión, podemos afirmar que durante la época que se desarrolló la depuración funcional, todas las Administraciones del Estado fueron sometidas a un alto nivel de burocratización, extendiéndose ésta más allá del poder ejecutivo y legislativo, sino también al orbe económico y empresarial tanto público como privado.

## **6.-PARTICULARIDADES DE LOS PROCESOS**

### **6.1.- Documentación y credenciales de los procesos.**

Una singularidad de los procesos depurativos consistió en la separación transitoria del servicio de todos los funcionarios y trabajadores de empresas públicas. Por tal peculiaridad, la normativa legal establecía una jerarquía a la hora de proceder a la depuración, con la finalidad de que pasasen este trámite rápidamente los funcionarios de superior categoría<sup>24</sup>, o aquéllos que era significativa su adhesión a la Causa.

En los procesos que no se iniciaban de oficio por las Comisiones Depuradoras, debían ser los propios funcionarios los que debían solicitar su reingreso en su empleo, incoando su propio expediente de depuración.

Para la formalización de un expediente, en primer lugar, el empleado debía comparecer y aportar en el plazo de ocho días desde su notificación ante la Jefatura Provincial del Cuerpo al que pertenecía o ante el Ministerio correspondiente<sup>25</sup>, una declaración jurada de su adhesión al Movimiento Nacional, así como una serie de cuestionarios que versaban sobre sus actividades políticas y sindicales anteriores y posteriores a la fecha de la sublevación<sup>26</sup>.

A modo de garantía, era conveniente acompañar estos documentos con una serie de avales rubricados por personas de indudable nombradía en el entorno franquista.

En referencia a los cuestionarios, en estos se formulaban preguntas tales como, cuándo prestó el funcionario su adhesión al Movimiento Nacional, de qué forma, o si había prestado algún servicio al gobierno republicano después del 18 de julio.

---

<sup>24</sup> Entre los que se encontraban secretarios, interventores y depositarios de la administración local.

<sup>25</sup> La no comparecencia era considerada crimen de guerra.

<sup>26</sup> Periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936.



La respuesta generalizada fue, que todos los cuestionados habían colaborado de alguna forma al éxito de la Causa, incluso antes del alzamiento. Pero lo más relevante era que la mayoría garantizaba su pertenencia a Falange Española o habían perseguido activamente a los enemigos, se dio la paradoja de que ninguno había militado, ni colaborado con el bando contrario.

Acto seguido a la presentación de la declaración jurada y los cuestionarios, el Órgano instructor declaraba la cesantía del funcionario hasta la verificación de la documentación aportada.

Adicionalmente a estas primeras credenciales presentadas, se requerían informes de antecedentes al Inspector Jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia refiriendo la pertenencia o no a partidos y sindicatos, al Juzgado militar sobre la existencia o no de hechos delictivos y a la Delegación Provincial de Información e Investigación de FET y las JONS<sup>27</sup>, para la investigación sobre posibles ascensos producidos de forma no natural al movimiento de escalafón y el posible desempeño de funciones al margen de su servicio.

Una vez comprobadas por la comisión depuradora las pruebas documentales, cabían dos posibilidades de resolución, la admisión sin imposición de sanción o la incoación del expediente para la imposición de la sanción correspondiente.

Sí el funcionario era propuesto para sanción, se incoaba un expediente por parte de la Comisión Superior Dictaminadora<sup>28</sup>, la cual debía examinar y resolver todos los expedientes abiertos por las Comisiones Depuradoras. Esta Comisión Superior estaba constituida por un funcionario de la carrera judicial con categoría de Magistrado, que actuaba como presidente, dos miembros del alto personal dependiente del Ministerio correspondiente, un funcionario de la carrera judicial y el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio.

El iter procesal del expediente era el siguiente, en primer lugar el Magistrado instructor dictaba providencia de la incoación del expediente sancionador, en el cual se formulaba un pliego de cargos<sup>29</sup>, se citaban a declarar al empleado, el cual tenía un

---

<sup>27</sup> Falange Española Tradicional y Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

<sup>28</sup> Esta Comisión se extinguió el 30 de enero de 1942.

<sup>29</sup> Los cargos más graves eran, la pertenencia al Frente Popular o algún grupo sindical, la lectura de determinada prensa considerada antifranquista, el hecho de no ser Católico, y no ser afecto al glorioso Movimiento Nacional.

plazo improrrogable de diez días para formular un pliego de descargos, así como a los testigos, se requerían informes al Jefe del SIMP<sup>30</sup>, sobre la conducta política del interesado, al alcalde del municipio donde residía para que acreditara la conducta vecinal y a la Delegación Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS.

Finalizado del proceso, y sin haber contado el expedientado sin ningún tipo de asistencia legal para su defensa, a excepción de la suya propia, lo que en palabras de Serrano Suñer<sup>31</sup> se denominaba “*Justicia al revés*”, se imponía la sanción pertinente y se daba traslado al Órgano pertinente de la certificación que dejaba separado del servicio al funcionario.

## **6.2.- Revisiones de los procesos.**

Terminado el proceso judicial, los expedientes depurados se sometían a una revisión para su conformidad por parte de diferentes autoridades. Las revisiones podían ser a instancia de la parte afectada o de oficio.

Las de oficio eran las menos habituales, y se abrían cuando se poseían nuevos elementos de juicio, por lo que eran efectuadas y sometidas a un nuevo juicio por parte de otro Órgano judicial diferente al primer instructor. Las revisiones a petición del interesado era lo más habitual, aunque en infinidad de casos no se aceptaron dichas revisiones.

Los procesos de revisión se caracterizaron por la diferencia en el resultado de las resoluciones con las emitidas inicialmente. En algunos casos fueron atenuadas debido a la presentación de nuevos avales, pero en muchos otros casos fueron agravadas por diferentes circunstancias, estas últimas dependían en multitud de ocasiones del grado de radicalización que tuviera el Órgano que realizase dicha revisión.

En función de la localidad donde se practicara el expediente de depuración, este podía ser revisado por la autoridad gubernativa, de ahí que el Gobernador Militar o Civil de la plaza<sup>32</sup>, eran quienes realizaban la verificación. Se dio la circunstancia de que la práctica totalidad de las revisiones realizadas por estos Órganos acrecentaron las sanciones, al ser objeto los sumarios de nuevas circunstancias agravantes del sujeto.

---

<sup>30</sup> Servicio de Inteligencia Militar y Policial.

<sup>31</sup> Ramón Serrano Suñer. Ministro de Gobernación entre 1938 y 1940.

<sup>32</sup> Principalmente capitales de provincia y localidades con alta resistencia a la sublevación.

Del mismo modo, en localidades de reducida población, tenía encomendada dicha supervisión el alcalde de la misma, siempre que se diera la eventualidad de que en dicho lugar no hubiera cuartel de la Guardia Civil, ya que sí en el pueblo o en su comarca estuviera asentando un acuartelamiento de dicho cuerpo, correspondía al Comandante del puesto dicha comprobación.

En relación con esta última afirmación, es destacable la situación a la que se enfrentaban los funcionarios depurados con expedientes sancionatorios abiertos, se daba la circunstancia de que, mientras sus expedientes eran revisados eran confinados en dichos acuartelamientos hasta que finalizase la revisión de su expediente.

Debido a la cantidad de expedientes que solicitaron ser revisados, las autoridades anteriormente citadas, podían a su criterio discrecional, delegar estas funciones en cualquier autoridad eclesiástica, consecuencia de lo cual, al repertorio de averiguaciones políticas y sociales a que eran sometidos los investigados, se les sumaban las religiosas.

Concluida la revisión de cada expediente, cabía la ficticia posibilidad de que el dictamen fuera impugnado por el interesado<sup>33</sup>. La resolución de estas impugnaciones se sometía al arbitraje del Gobernador Civil de la provincia o superior jerárquico del funcionario.

El resultado de estas impugnaciones, se limitaba en la mayoría de los casos a ratificar lo dictado por el Órgano revisor, como consecuencia de que en algunos temas había sido el propio Gobernador Civil quien las había decretado, en otras, porque se evitaba el enfrentamiento con otras autoridades y en el supuesto de los superiores jerárquicos, era contraproducente cuestionar una sentencia dictaminada por una instancia de mayor poder, ya fuera civil, militar o eclesiástica.

### **6.3.- Ratificaciones de los procesos.**

Los expedientes depurativos después de haber sido examinados y enjuiciados por las instancias judiciales y revisados por las autoridades pertinentes en cada caso, debían ser ratificados por las altas instancias del Estado.

---

<sup>33</sup>Inicialmente los sancionados no podían solicitar una revisión del castigo. Hasta el 11 de marzo de 1938 no se reconoce la posibilidad de recurso de revisión.

Este cometido era llevado a cabo en principio por la Comisión Superior Dictaminadora Provincial, la cual, después de examinado el expediente lo elevaba al Director General del Ministerio, quien a su vez volvía a informar el expediente para elevarlo al Ministro del ramo, que era quien tomaba la decisión final.

El fin que perseguía el régimen con las sucesivas revisiones y ratificaciones, era asegurarse de quien era readmitido al servicio era un fiel defensor de la causa y un elemento con capacidad de transmitir su ideología. Por el contrario, en el caso de los considerados culpables, el propósito era eliminarlos de la sociedad, bien fuera de forma física, económica o social.

#### **6.4.- Acreditación de avales.**

A causa del férreo control al que eran sometidos los funcionarios para constatar su fidelidad y adhesión al Régimen, la acreditación de avales se convirtió en un salvoconducto que hacía que dicho control se convirtiera en un laxo trámite.

Junto a la residencia de los empleados públicos, en uno u otro territorio durante la guerra, los avales serían factores decisivos para que los juzgados depuradores encontrasen antecedentes a favor de librar de la depuración a los funcionarios.

La necesidad de conseguir testimonios de personas conocidas, amigos, familiares o compañeros de trabajo, que estuvieran especialmente vinculados al entorno de Falange, del franquismo o de la Iglesia Católica, para que acreditasen la declaración jurada del funcionario expedientado y que desmintieran las acusaciones que se pudieran verter contra él, se convertía en el principal desvelo del funcionario durante el transcurso del proceso de depuración al que era sometido, ya que en función de estos y de la importancia de la persona avalista, dependía la confirmación en su destino o que la sanción fuera de menor gravedad.

Así mismo, también estaban muy valorados los informes que pudiesen aportar las autoridades donde residía el empleado, concretamente los expedidos por el alcalde, el cura, la Guardia civil o de un padre de familia bien respetado del lugar.

En cuanto al número de avales que se podían presentar, el expedientado tenía la licencia de aportar los que estimara oportunos para utilizarlos en descargo propio

Sin embargo, no tenían el mismo efecto los avales presentados por un alto funcionario, que un funcionario de la escala básica, así como tampoco tenían el mismo resultado las garantías rubricadas por un prócer del régimen que por un compañero de trabajo.

#### **6.4.1.- Organismos comisionados para la inspección de avales.**

La entrega de avales implicaba una garantía de indemnidad frente a las posibles consecuencias de los exámenes de los expedientes, por lo cual, estos se convirtieron en parte esencial de las pruebas de descargo aportadas por los investigados.

Debido a la confusión que generó en un principio la entrega de la documentación oportuna, la sospecha de la nula validez de los avales, así como la reticencia por parte de los garantes sobre las posibles represalias que pudieran sufrir, al inicio de las primeras depuraciones, los expedientados se surtían escasamente de este tipo de documentos, por lo cual, los mismos órganos revisores eran suficientes para inspeccionar los mismos.

Teniendo en cuenta que el proceso de depuración se alargaba *sine die*<sup>34</sup> y que la cantidad de causas aumentaba notablemente, los órganos encargados de su instrucción se colapsaron<sup>35</sup>, razón por la cual, la comprobación de la documentación se hizo de forma más laxa con el fin de descongestionar la situación.

Esta circunstancia anteriormente referida, unida a la seguridad que demostraba la consignación de avales o informes positivos, dio como resultado que los funcionarios se proveyeran de forma masiva de estos documentos. De ahí que, el aumento de trabajo que sufrieron los entes depuradores conllevó a que se tomara la decisión de distribuir el trabajo que ocasionaban los expedientes.

Con el propósito de disminuir y aligerar los procesos, nuevas instituciones fueron comisionadas para formar parte de los órganos instructores y revisores. Entre los nuevos organismos que tuvieron más relevancia en la nueva tarea encomendada se encontraban el Frente de Juventudes<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Sin plazo o fecha determinados.

<sup>35</sup> En 1940 se estimó que harían falta tres años para que los juzgados y tribunales instruyeran y procesaran las causas que tenían acumuladas en espera, sin contar las que se abrieran a partir de aquel momento[

<sup>36</sup> Organismo político-administrativo creado en España en 1940, como sección juvenil autónoma de Falange Española.

El Frente de Juventudes era considerado como “*La obra predilecta del Régimen*”<sup>37</sup>. Del mismo modo también se encargó la tarea a la Iglesia Católica.

Esta última, motivada por la necesidad de reconocimiento y prebendas por parte del franquismo se convirtió en investigadora del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradora del aparato judicial<sup>38</sup>. Durante el tiempo que duró el régimen franquista, el clero se distinguió por la denuncia en todas las provincias, de los enemigos del mismo, así como, por el compromiso con su ideario.

La causa principal de la designación de la Iglesia como órgano verificador de los avales fue que en el año 1940, la institución contaba con casi 25000 religiosos en su organización, lo cual proporcionaba una situación de convicción al régimen, de que todas las tareas que se le encomendasen serían realizadas con premura y el máximo celo.

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, en palabras de Espinosa (2014) “*La iglesia se convirtió en la Inquisición del franquismo*”<sup>39</sup>, esta afirmación proviene del exceso de persistencia y diligencia que puso la Iglesia en servir de aliado a la causa.

Este compromiso con las ideas franquistas, le supuso a la organización eclesiástica una cantidad innumerable de reconocimientos, pero posiblemente el más destacado fue en el ámbito de la enseñanza formal, la cual estuvo siempre bajo el control directo o indirecto de la Iglesia católica.

Igualmente, el papel de la Iglesia durante la dictadura fue tan importante que varios preceptos legislativos de la misma se asentaron sobre el dogma católico y sobre la Doctrina Social de la Iglesia, sirvan como ejemplos, el Fuero del Trabajo, el Fuero de los Españoles, así como los Principios del Movimiento.

#### **6.4.2.- Mercado ilegal de avales.**

En relación con la importancia capital que adquirieron los avales durante la depuración funcional, es significativo señalar que a partir de 1940, se dio la circunstancia de que la práctica totalidad de declaraciones juradas de adhesión al Movimiento iban acompañadas de multitud de este tipo de recomendaciones.

---

<sup>37</sup> Amparo, M.P. (2011). *Palabras en azul: aportes para un diccionario falangista*. Ed. Barbarroja. Madrid.

<sup>38</sup> Casanova, J. (2001). *La Iglesia de Franco*. Ed. Crítica. Barcelona.

<sup>39</sup> Espinosa, F. (2014). *Por la religión y la patria*. Ed. Crítica, Barcelona.

La explicación a este nuevo hecho estaba motivado por varias circunstancias, en primer lugar, la situación económica que vivía el país en esos momentos, la cual propiciaba que la necesidad financiera de la población en general, fuese suficiente justificación para respaldar ficticiamente a cualquier persona que lo necesitase a cambio de alguna dádiva. Por otra parte, se daba la coincidencia en algunos casos que las personas garantes ejercían funciones de cualquier índole en los órganos depuradores, tanto en su fase de instrucción, revisión o ratificación, por lo cual, la importancia que adquiriría dicho título era directamente proporcional a su equivalencia económica, es decir, cuanto más rango jerárquico tenía el benefactor, de más bienes tenía que desprenderse el beneficiado.

Teniendo en cuenta que este “mercado” de avales se extendió con suma rapidez por todo el Estado, se dio la paradoja de que muchos investigados presentaron credenciales emitidas desde diferentes puntos del país, sin importar quien los firmaba ni qué cargo ostentaba y por supuesto sin haber mantenido, ni mantener ningún tipo de relación personal, lo sustancial era presentar el mayor número posible.

#### **6.4.3.- Efectos y represión del mercado ilegal de avales.**

Como resultado del cambalache incontrolado de avales, las consecuencias que esto derivó fueron muy dispares. Por parte de los expedientados, los más beneficiados fueron readmitidos en sus puestos sin más dilación, atenuadas sus penas en caso de que estuvieran pendientes de sanción o condonadas si ya estaban sancionados.

Por otra parte, para los avalistas supuso un acelerado e incalculable rédito económico, el cual aumentaba exponencialmente en función de la premura e infortunio de la persona expedientada.

Transcurrido un tiempo desde las primeras revisiones y debido a la cantidad ingente de avales presentados, las autoridades empezaron a sospechar de tal circunstancia, por lo que iniciaron las oportunas investigaciones para corroborar las garantías. Fruto de estas pesquisas, se confirmó que la gran mayoría de ellos carecían de la exigida autenticidad. Por tal motivo, se adoptaron medidas por parte las autoridades, estas consistían en aplicar las letras k, l y p del Artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Políticas, tanto a los funcionarios que se hubieran provisto fraudulentamente de estos avales, como a los firmantes que se hubieran prestado a ello,

con la particularidad de que serían remitidos sus casos a los Tribunales militares en vez de a los Tribunales ordinarios. De ello se desprende que las penas a las que se debían enfrentar serían mucho más gravosas de las que en un principio cabría esperar.

### **6.5.- Funcionarios delatores.**

Dado que para cualquier régimen totalitarista la necesidad de controlar a los adversarios a su ideario se convierte en uno de los núcleos centrales de su política, no es menos cierto que para llevar a cabo esta tarea necesita proveerse de una red paralela de “colaboradores” a la formada institucionalmente, este servicio análogo estaba integrado por personas de cualquier estrato social, de dudosa catadura moral y falta de escrúpulos. De ahí que el Régimen franquista contase con una amplia plantilla de delatores.

El estímulo de estos delatores se basaba en diferentes causas, una veces la delación se producía por simple rencor hacia los vencidos, en otros casos, por la necesidad de estar al margen de cualquier posible sospecha de falta de fidelidad al Régimen, pero en el caso de los empleados públicos estas causas eran bien distintas, las delaciones se producían unas veces por la abyecta necesidad de ocupar el puesto de otro compañero al que no se podía superar por méritos propios y otras por el simple capricho de eliminar a un elemento que no gozaba de la anuencia de su jefe o de sus compañeros de departamento.

Pero dejando de lado estas particularidades, los delatores mejor considerados por las autoridades, eran los empleados públicos que gozaban de una situación social fuera de toda sospecha de que pudieran estar informando a la misma del comportamiento de sus vecinos o compañeros de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de los encargados de los cementerios, el Régimen consideraba que cualquier persona que no cumpliera con el precepto religioso de visitar asiduamente a sus difuntos era merecedora de ser sospechosa de ateísmo y por consiguiente de tener ideas izquierdistas.

Dejando al margen a la institución funcionarial, también era conocido en la época que los monaguillos de las iglesias eran los ojos y oídos del Régimen dentro de los templos, sus fundamentos se sostenían en el cumplimiento de las obligaciones cristianas que se les suponían a todas las personas y por ende las de un buen español.



A modo de anécdota, señalar que el propio dictador sufrió este espionaje por parte del monaguillo del Palacio del Pardo<sup>40</sup>. Juan Cobos Arévalo que así lo plasmó en su libro<sup>41</sup>.

## **7.-PRINCIPALES SECTORES DEPURADOS.**

### **7.1.- Justicia.**

Uno de los primeros sectores depurados por la necesidad llevar a buen término la depuración funcional fue el de Justicia. Se hacía imperiosa la participación del estamento judicial en la purga que se pretendía. Por lo cual desde el inicio de la sublevación los funcionarios dependientes de la Administración de Justicia fueron sometidos al proceso de depuración por parte de Tribunales castrenses.

En relación con los altos funcionarios, entre los que se encontraban jueces y fiscales, se estima que el 5 por 100 de la totalidad de los jueces fueron apartados del servicio definitivo, así como un número no muy elevado de fiscales. Ya dentro del estamento judicial, la depuración se practicó con más exhaustividad a los funcionarios que desarrollaban su labor en el ámbito municipal y con menos rigurosidad a los de las categorías superiores.

Con esta acción, el Régimen alcanzaba dos de sus objetivos propuestos con este colectivo, por una parte, disponer de un nuevo aparato judicial, asentado sobre nuevas bases jurídico-políticas formado por funcionarios que ya habían ejercido durante la II República, pero que habían demostrado su adhesión a la nueva causa nacional, y por otro, se constataba la certeza de que en su labor judicial observarían y transmitirían los valores sociales, políticos, morales y religiosos que proclamaba el nuevo Régimen.

A diferencia de la ventura que tuvieron los jueces, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia fueron implacablemente sometidos a depuración, los motivos de esta inclemente actuación estaba provocada por la creencia que tenía el Régimen en la posible falta de aceptación del nuevo sistema por haber servido con anterioridad a los denominados por este como “*rojos*”<sup>42</sup>. Otra de las convicciones sobre las que cimentaba

---

<sup>40</sup> Residencia del General Franco.

<sup>41</sup> Cobos, J. (2011). *La vida privada de Franco: Confesiones del monaguillo del Palacio de El Pardo*. Ed. Urano. Barcelona.

<sup>42</sup> Término peyorativo que utilizaban los sublevados para referirse a los defensores de la República durante la Guerra civil española.

el Régimen esta desconfianza, consistía en la cercanía que tenían estos funcionarios con la población y la posibilidad que tenían de manejar documentación sensible que pudiera contener información relevante para sus propósitos.

## **7.2.- Maestros.**

En este punto se tratará, el que a juicio de todos los estudiosos de la depuración funcional fue el sector que con más crudeza sufrió las consecuencias de dicho acto. Desde el primer momento, el Régimen fijó su mirada en una figura fundamental para controlar ideológicamente al pueblo: el Maestro.

La depuración del Magisterio, tenía una finalidad exclusivamente política y en absoluto profesional. De ahí, que la depuración de los maestros en ningún momento contempla la mejora del profesional, solo su reeducación política.

El Régimen necesitaba justificar la labor depuradora del Magisterio ya que no existía razón alguna para tal represión, para lo cual acudió a su fiel aliada, la Iglesia Católica, la cual argumentó la depuración como una selección y purificación religiosa de los que estaban destinados a salvaguardar la patria.

Era tal la animadversión hacia los maestros y todo lo que lo rodeaba, que el Ministro de Educación Nacional Sainz Rodríguez, calificó la Escuela Superior del Magisterio y las Residencias de Estudiantes como *“fortificaciones que tenemos que bombardear”*<sup>43</sup>.

A los maestros se les suponía una superioridad intelectual que le convertía en un elemento de respeto, siendo su opinión sobre diversas materias muy importante para la mayoría de la población, convirtiéndose en el ejemplo a seguir.

Por todo ello, desde el principio se dictaron leyes con la pretensión de controlar a estos elementos, ya que con su control el pueblo podría ser reeducado en la nueva doctrina política e ideológica.

Fue tal la urgencia demostrada en actuar sobre estos funcionarios que el día 19 de agosto, la JDNE aprobaba la primera Orden depuradora<sup>44</sup>, según la cual los alcaldes e inspectores de enseñanza debían enviar un informe al Rector Universitario dando cuenta

---

<sup>43</sup> López, J.R. (2011). *La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra. El proyecto político de Pedro Sainz Rodríguez*. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.

<sup>44</sup> Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Número 9. Burgos 21 de agosto de 1936.

de las actividades y la conducta de los maestros, para que fuera este únicamente quien tomara las medidas oportunas para separar a quien considerase pertinente. Así mismo el Rector debía evacuar informe al Gobernador Civil de la provincia con las decisiones tomadas. Esta situación se alargó hasta la desaparición de la JDNE, a partir de ese momento los procesos se hicieron a través de un sistema reglado.

La finalidad de esta Orden era principalmente separar del cargo a quien con sus ideas perturbaran las conciencias infantiles, así como la distorsión del aspecto patriótico y moral de los alumnos. Sirva para ilustrar esta idea, las palabras del sacerdote Herrera (1934)<sup>45</sup>, “*El maestro ha llegado a ser un instrumento de disolución política y social, un elemento revolucionario*”.

Fue tan escrupulosa la depuración de los docentes, que el Régimen para tal fin dispuso cuatro comisiones diferentes, - en ningún otro estamento funcional hubo clasificaciones diferenciadas del personal -, La Comisión A encargada de depurar al personal universitario, la Comisión B para el Profesorado de Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, la Comisión C sobre todo el personal adscrito a los institutos, Escuelas Normales, de Comercio, Artes y Oficios, de Trabajo, Inspecciones de 1ª Enseñanza, Sección Administrativa y en general a cuantos dependieran del Ministerio de Instrucción Público y no estén incluidos en la misión atribuida a las anteriores comisiones y la Comisión D para el personal de magisterio.

Todas estas Comisiones debían seguir el mismo procedimiento de instrucción, con la salvedad de la Comisión D, la cual, debía acompañar de forma preceptiva los informes pertinentes con otros expedidos por el Alcalde, la Guardia civil y de un padre de familia bien respetado, del lugar en que radicase la escuela. Otra particularidad que tenía esta misma comisión era que en principio se fijó un plazo temporal de tres meses para la caducidad de los expedientes. Sin embargo, este plazo se tuvo que ampliar, llegando a prolongarse más de tres años en algunos casos.

La depuración del sector de la enseñanza no solo abarcaba a los enseñantes en activo, de modo idéntico alcanzó a los estudiantes de magisterio, estimándose de obligado cumplimiento para estos alumnos el expediente de depuración. A los informes de los alumnos emitidos por las autoridades, debía adjuntarse un informe de cada profesor que hubiera impartido alguna materia al mismo. Las consecuencias que podía

---

<sup>45</sup> Herrera, E. (1934). *Educación de una España nueva*. Ediciones Fax. Madrid.

conllevar para el alumnado ser sancionado eran idénticas a las del profesorado, a excepción, de la retirada del servicio activo, tal como se recogía en la Orden dictada el 29 de abril de 1937<sup>46</sup>.

Debido a la importancia que el Régimen dio a este sector en su afán de depurarlo, los cargos que se podían presentar contra los docentes alcanzaban un amplísimo elenco, los más utilizados fueron el hecho de ser izquierdista, laico y seguidor de las teorías marxistas, pero también se admitían cargos que rozaban el absurdo, tales como, tener pocas ganas de trabajar o haber confeccionado ropa para los niños de una guardería de la zona republicana.

Para concluir este apartado, la depuración del Magisterio no tenía otra finalidad que el control ideológico y político de la enseñanza plasmada en un plan meditado y ordenado por el Régimen y así lo reflejó en sus palabras Álvarez (1986). *“En la depuración de los maestros fue tan útil el fusilamiento como la sanción de tres meses de empleo y sueldo”*<sup>47</sup>.

### **7.3.- Correos.**

Otros de los sectores del funcionariado que fue especialmente depurado fue el perteneciente al Cuerpo de Correos y Telégrafos, esta institución estaba en permanente sospecha de las autoridades franquistas debido las características especiales en cuanto a la forma de desarrollar su labor.

El Régimen tenía la clara convicción de que a través del envío postal se podrían urdir tramas que pusieran en peligro su continuidad, por lo que no dosificó sus esfuerzos en la tarea.

Así mismo, dentro del Cuerpo de las Comunicaciones del Estado se aglutinaban las empresas concesionarias de servicios públicos de comunicaciones tales como la Compañía Telefónica Nacional, Transradio o Italcable<sup>48</sup>, de ahí que sus plantillas de trabajadores también pasaron los procesos de depuración.

---

<sup>46</sup> Boletín Oficial del Estado. Número 194. Burgos 2 de Mayo de 1937.

<sup>47</sup> Álvarez, W. (1986). *La represión de la posguerra en León: Depuración de la enseñanza (1936-1943)*. Ed. García. León.

<sup>48</sup> Empresas de comunicaciones telefónicas y telegráficas.

Durante los procesos de depuración de estos servicios públicos -concretamente en la Compañía Telefónica Nacional-, se produjeron unos hechos de notoria consideración, su Consejo de Administración se opuso a las readmisiones ordenadas por los Tribunales aduciendo que el perdón de los trabajadores con alguna sanción implicaba un descredito para la empresa, además de la puesta en peligro del servicio que prestaba.

Se dio la circunstancia de que en este Cuerpo fue donde se registró un mayor volumen de sanciones, al afectar éstas a un 34,72% de la plantilla de dicho servicio estatal, siendo el 20,10% separados del servicio de un total de algo más de 13000 funcionarios. El Cuerpo de Correos fue también el estamento donde más puestos de trabajo se abandonaron tras la sublevación militar debido a la gran cantidad de afiliados y simpatizantes que había a distintos sindicatos en este Cuerpo.

Dentro del cuerpo de Correos y Telégrafos se encuadraba el servicio de trenes-correo<sup>49</sup>, encargados del transporte de grandes cantidades de correspondencia por el país. Se consideraba a los trabajadores de esta sección como trabajadores “especiales”, debido a las singularidades de su trabajo<sup>50</sup>, de ahí que sus emolumentos superaran con creces a los de sus compañeros de otros destinos.

Pero esta circunstancia de especialidad también fue tenida en cuenta por las autoridades a la hora de la depuración, todos los trabajadores de este servicio fueron suspendidos de sus empleos y sustituidos por personal militar mientras duraban los procesos de depuración. Una vez concluidos estos, una parte de estos empleados fueron militarizados y obligados a incorporarse al el recién creado Servicio Militar de Ferrocarriles. El resto de empleados que salieron indemnes de los procesos de depuración pasaron a formar parte del Ministerio de la Gobernación junto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

#### **7.4 Ferrocarriles.**

Al hilo del último punto del epígrafe anterior, hemos de indicar que al inicio de la sublevación militar de 1936, existían en España más de 10 Compañías de Ferrocarriles. De estas, una gran parte de las más importantes quedaron en zona republicana, lo que provocó la inmediata puesta en funcionamiento de los procesos

---

<sup>49</sup> Conocidos como los ambulantes en la terminología postal.

<sup>50</sup> Separación familiar, nocturnidad, riesgos como asaltos, accidentes.

depurativos para restablecer el normal funcionamiento de este servicio en la zona sublevada

El sistema ferroviario era considerado de tal importancia para los sublevados que la JDNE, concedió las competencias depurativas en materia ferroviaria a la Jefatura Militar de cada provincia. Esta asignación se hizo con la pretensión de realizar la depuración conforme a la legislación castrense por la delicadeza del asunto. No fue hasta el 1 de septiembre de 1939 cuando estas competencias fueron designadas a los recién creados Consejos Directivos de las compañías ferroviarias<sup>51</sup> por medio de un Decreto, a los cuales se les atribuyó la potestad de aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas.

Debido a la cantidad de expedientes, se hizo necesaria la creación del Negociado Auxiliar de Depuración de Personal Ferroviario. Este nuevo órgano se encargaba de la tramitación y proposición de resoluciones de la referida depuración.

Cada Compañía contaba con sus propios juzgados, con competencia funcional y territorial sobre la misma. Era tan intensa la labor depurativa, que a modo ejemplificante podemos señalar que la Compañía del Oeste contaba con 12 juzgados destinados en exclusiva para la depuración. Es significativo el dato de las sentencias desfavorables dictadas contra los trabajadores por estos juzgados, se estima en un 40% de la totalidad de ellas incluían sanciones o separaciones definitivas del servicio.

En el proceso de depuración ferroviario se dio la particularidad de que los trabajadores jubilados también fueron sometidos a depuración. Por esta causa le fue retirada su pensión aproximadamente a 130 trabajadores.

Por último, hemos de exponer que en enero de 1941 fue aprobada la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera<sup>52</sup>, por la que se produjo la nacionalización de todas las compañías de ferrocarril, haciéndose cargo de las últimas depuraciones RENFE<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Desde el 3 de agosto de 1936 todas las Compañías ferroviarias privadas fueron incautadas.

<sup>52</sup> Boletín Oficial del Estado. Núm. 28 de 28 de enero de 1941. Ley de bases de Ordenación Ferroviaria y de los transportes por carretera de 24 de enero de 1941.

<sup>53</sup> Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

## **8.-FUNCIONARIAS Y DEPURACIÓN.**

### **8.1.- Depuración por razones políticas.**

Es incuestionable que el mayor porcentaje del colectivo funcional que fue sometido a depuración estaba formado por personal masculino, esta aseveración adquiere certeza debido a dos factores fundamentales, por una parte, en 1936 la práctica totalidad del funcionariado estaba formado por hombres y por otra, el concepto que el bando franquista tenía sobre el papel de la mujer en la sociedad. A modo de ejemplo, a las funcionarias se les consignaba en primer lugar su profesión habitual como “*sus labores*”, y en un subapartado su actividad profesional.

Hasta la instauración de la Segunda República, las mujeres habían tenido un papel eminentemente secundario en el estamento funcional, su labor se limitaba a servir de auxilio al personal masculino. A partir de ese momento se inició la incorporación de las mujeres a las distintas Administraciones Públicas dotándolas de unas atribuciones iguales a las de sus colegas masculinos, pero la corta duración de este periodo impidió que un número significativo de ellas alcanzase niveles de relevancia jerárquica en el escalafón.

Desde un primer momento, las principales razones para las que las funcionarias fueron depuradas y en abundantes casos sancionadas, se basaban en la pertenencia a partidos de ideología izquierdista, haber simpatizado o militado en algún sindicato o el hecho de haber trabajado para el gobierno republicano. En otros casos, sus cargos se sustentaban en circunstancias tan dispares como grotescas, el mero acto de haber confeccionado ropa de abrigo para hijos de combatientes republicanos o haber acogido en su casa a personas desvalidas sospechosas de ser republicanas, era suficiente motivo para imponerles una sanción administrativa en el mejor de los casos, cuando no ser juzgadas por un Tribunal militar en el peor de ellos.

Así pues, todas las funcionarias pasaron por los procesos de depuración, pero de entre todas las Administraciones, las funcionarias que fueron sometidas a depuración de forma más implacable fueron las que conformaban los Cuerpos de Enseñanza, Sanidad, Correos y Prisiones.

## **8.2.- Depuración por razón de sexo.**

Como se ha detallado en el epígrafe anterior las mujeres funcionarias padecieron al igual que sus compañeros masculinos la depuración funcional por sus convicciones políticas y sociales, pero no es menos cierto que también tuvieron que soportar una segunda depuración que en algunos casos era más doliente que la iniciada por las autoridades, esta era la basada en el hecho de ser mujer.

Ser mujer y además funcionaria en el periodo de referencia de este estudio, era sinónimo en muchos casos de ser persona de segundo orden por su peligrosidad moral y social, estas ideas radicaban por una parte, en la circunstancia de que en un Régimen eminentemente machista se consideraba que la mujer no podía franquear el umbral de su puerta sin que fuera considerada transgresora de las normas morales. Si a este pensamiento unimos la contingencia de trabajar fuera de su hogar, la falta se duplicaba, lo que daba lugar a resultados fatales.

De modo idéntico, era suficiente la circunstancia de ser esposa, madre o hija de republicanos para considerar a la mujer culpable de hechos jamás perpetrados por esta. Además, en ese tiempo la mujer fue relegada, ya no por el Régimen, sino por sus propios familiares y amistades a un escalafón social inferior. También se consideraba el trabajo asalariado femenino como una actividad masculina, justificable sólo en caso de viudedad o soltería.

Si apelamos a varios ejemplos para ilustrar lo anteriormente expuesto, podemos hacer referencia a que los propios compañeros, ya fuera en el ámbito laboral o político, asignaron a las mujeres labores secundarias dando por supuesto que no podrían realizar otras. También se dio la paradoja de que si el padre o el marido de la funcionaria deseaba que su familiar fuera separada definitivamente del servicio solo tenía que denunciar a ésta con el cargo de transgresión de la vida familiar.

Inclusive el nuevo Régimen, en su particular visión sobre la mujer, consideraba que las funcionarias que ocupaban puestos que a su razón eran de exclusivo cumplimiento por personal masculino debían ser reeducadas y dirigidas a la sana moral, con la intención de devolverlas a la convivencia “natural” del país.



### **8.3.- Limitaciones de las funcionarias.**

Desde el primer momento, las mujeres funcionarias fueron suspendidas de sus puestos hasta haber pasado satisfactoriamente el proceso depurador. Aun habiendo acreditado su adhesión a la Causa, las mujeres pasaron a formar parte de los Cuerpos Auxiliares de la Administración, estos organismos fueron creados con la finalidad de restringir las posibilidades de promoción de las funcionarias.

Tal fue la obsesión del Régimen por neutralizar las aspiraciones laborales de las funcionarias que dictó innumerables leyes para conseguir su objetivo. Entre estas se encontraba una Orden del Ministerio de Trabajo<sup>54</sup>, donde se prohibía a los funcionarios femeninos obtener la categoría de Jefe de Administración. También estaba vedada la posibilidad de trabajar en profesiones tales como notarias, policía o Inspección de Trabajo.

Así mismo se establecieron premisas donde se obligaba a las funcionarias y empleadas de servicios públicos a abandonar su trabajo cuando contrajeran matrimonio a cambio de una dote establecida<sup>55</sup>.

Otra medida que afectaba a la posibilidad de continuar trabajando a las funcionarias era el “subsidio familiar”, este suplemento económico nacía con la intención de aportar a la economía familiar una parte del salario dejado de percibir por la mujer cuando abandonaba su puesto de trabajo.

De igual modo, cualquier funcionaria debía abandonar su ocupación si su marido cobraba una cantidad suficiente para el mantenimiento de la economía familiar. También se dotaba de autorización al marido cuya esposa trabajase para cualquier Organismo Público de disponer íntegramente del salario de ésta.

A partir de 1942 se prohibió a las mujeres casadas el ingreso en la Administración excepto en aquellos casos que la labor a desempeñar se considerara especialmente femenina, como eran los casos de la Enseñanza y la Sanidad.

---

<sup>54</sup> Orden de 27 de septiembre de 1939.

<sup>55</sup> Esta dote consistía en una cantidad económica tasada, lo que haciendo una traslación temporal a la actualidad, sería una indemnización por despido.

#### **8.4.- Consecuencias de la depuración para las funcionarias.**

El alcance de los expedientes de depuración que se llevaron a cabo contra las funcionarias tuvieron unos resultados que podríamos considerar a nuestro juicio muy dispares.

En primer lugar, es necesario señalar que aunque en la mayoría de los casos, las funcionarias salieron indemnes de los procesos depurativos, más del 30% de estas trabajadoras fueron apartadas definitivamente del servicio por diferentes circunstancias, entre los motivos que auspiciaron esta situación derivaban entre otros, la necesidad de dar ocupación a mutilados de guerra, para lo cual, en los puestos que ocupaban las mujeres fueron colocados los integrantes de este colectivo.

De igual forma, se produjeron una gran multitud de bajas voluntarias debido a la puesta en marcha de la distinta normativa que limitaba las funciones de estas trabajadoras y que a medio plazo las obligaría a abandonar su puesto.

Con respecto a los procesos que concluyeron con sanciones, hemos de señalar, que en proporción, las mujeres funcionarias sufrieron penas muy superiores a las impuestas a sus homólogos masculinos por los mismos hechos. Tal era el caso, que por el delito de exaltación a la rebelión, una funcionaria era condenada a seis años de prisión mientras que a un hombre se le condenaba a dos años de presidio.

No obstante, una de las penas más crueles que sufrían las funcionarias -a excepción de la pena capital-, consistía en que cuando eran encarceladas por delitos graves, sus hijos menores también eran reclusos con ellas, en otros casos los hijos eran separados definitivamente de sus madres y se entregaban en adopción a familias franquistas o internados en hospicios o seminarios para ser reeducados según los criterios falangistas.

### **9.- CONSECUENCIAS DE LA DEPURACIÓN.**

#### **9.1.- Sanciones.**

En este apartado trataremos los diferentes tipos de consecuencias que podía conllevar la imposición de alguna sanción a los funcionarios, trabajadores temporales de la Administración o trabajadores de las Empresas Públicas.

El Régimen franquista creó una tupida red de condenas que incluían sanciones económicas, requisas de bienes, inhabilitaciones, destierros, traslados forzosos y otras de carácter más grave que se detallaran más adelante.

Es importante señalar que al margen de las sanciones legisladas, existían otro tipo de castigos que se aplicaban sin más criterio que el libre albedrío de quien los dictaba. Entre estas sanciones subsidiarias para los funcionarios se encontraban la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de un mes a dos años y la jubilación forzosa, también cabía la posibilidad para el personal contratado temporalmente en alguna Administración la imposición de sanciones que derivaban en la incapacitación para opositar en un plazo de uno a seis años.

En este sentido, se hace necesario exponer algunas circunstancias peculiares que tenía la imposición de sanciones. Era habitual aplicar éstas de forma conjunta, es decir, por un mismo cargo se castigaba al funcionario con varias penas según las circunstancias de cada caso, las cuales se podían cumplir de forma conjunta o de forma escalonada. Otra particularidad hace referencia a la solicitud de revisión de alguna sanción, cuando se dictaba la resolución de la misma, en muchos casos, la pena ya se había cumplido, el hecho de haber solicitado la verificación no paralizaba la ejecución de la misma.

En el siguiente epígrafe se detallaran las diferentes sanciones legisladas y sus consecuencias.

#### **9.1.1.- Leves.**

Después de haber significado algunas singularidades de los procesos sancionadores, en este apartado trataremos las medidas correctivas leves que a criterio de los enjuiciadores se imponían. Así, la suspensión de empleo y sueldo durante varios meses, la prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de uno a cinco años, la postergación de uno a cinco años y la prisión de uno a seis años eran consideradas sanciones livianas

Por tanto la imposición de estas penas se basaban en cargos tales como, haberse incorporado el funcionario fuera de plazo, haber acudido a alguna manifestación política durante la II República o leer prensa o pasquines de ideología izquierdista.

### **9.1.2.- Graves.**

En cuanto a la aplicación de sanciones graves, el Régimen consideraba que la aceptación de ascensos que no fueran consecuencia del movimiento natural de las escalas, el desempeño de funciones que no fueran propias de su categoría, la falta de cooperación necesaria del funcionario para la victoria de los sublevados o cualquier hecho que supusiera una supuesta acción antipatriótica daba como resultado una sanción adecuada a la falta cometida.

Por consiguiente, cualquier funcionario que hubiera incurrido en alguno de estos casos era merecedor de penas tales como el traslado forzoso a otra provincia durante un periodo no inferior a dos años ni superior a diez<sup>56</sup>, el destierro de su localidad unido a la separación temporal del servicio<sup>57</sup>, la inhabilitación vitalicia para el desempeño de puesto de mando o de confianza, así como las penas de prisión de seis a diez años conformaban el elenco de las sanciones graves

### **9.1.3.- Muy graves.**

Cualquier funcionario que hubiera sido sancionado por un Tribunal Militar, indistintamente de los cargos que se le hubieran imputado se convertía de manera tácita en candidato a ser sancionado con una de las sanciones consideradas muy graves.

El hecho de haber participado durante la contienda en el bando republicano, haber ostentado cargos de relevancia en el anterior gobierno, así como no haberse presentado para su incorporación al servicio cuando fue requerido, llevaban aparejadas las penas de separación definitiva del servicio, prisión mayor de treinta años de reclusión o la pena de muerte.

## **10.-REVISIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA DEPURACIÓN.**

### **10.1.- 1951. Reapertura de expedientes.**

Transcurridos doce años desde el establecimiento del Régimen franquista, el 21 de diciembre de 1951 se dictó una Orden por parte del Ministerio de la Gobernación<sup>58</sup> donde se expresaba la posibilidad a criterio potestativo de los Ayuntamientos,

---

<sup>56</sup> Era habitual enviarlos fuera de la península con la intención de reducir en la medida de lo posible sus contactos personales.

<sup>57</sup> La duración de la separación temporal del servicio estaba condicionada a la estimación de su comportamiento y adhesión al Régimen.

<sup>58</sup> Boletín Oficial del Estado núm. 3 de 3 de enero de 1952. Orden de 21 de diciembre de 1951 sobre revisión de expedientes de depuración.

Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares de revisar de oficio los expedientes sancionados en dichas Administraciones por el proceso de depuración. En dicha orden se reconocía la severidad con la que se había aplicado la Ley de depuración y así lo expresaba en su preámbulo *“La natural rigidez de los preceptos legales impuestos por las circunstancias en que se dictaron ponen de relieve la conveniencia de revisión”*

Estas corporaciones podían revisar todos aquellos expedientes que se hubieran sancionado con penas leves, dejando para los Gobiernos Civiles la revisión de los penados por faltas graves.

La apertura de estas revisiones en el caso de ser estimadas favorables conllevaban la regulación de los efectos administrativos pertinentes. Como era el caso de la regularización de haberes o el encuadre en el escalafón correspondiente a la categoría del funcionario, entre otros.

## **10.2.- Motivación de la revisión.**

Según varios historiadores consultados no existe un claro acuerdo sobre los motivos que llevaron al Régimen a la reapertura de los procesos depurativos para su revisión. De una parte, está la creencia del comienzo de una etapa de aperturismo económico y cambio político y social, conocida como Desarrollismo, y de otra parte, la certeza de que esta nueva actitud fue impuesta por Estados Unidos, ya que a principios de la década de los 50, España comenzó a tener contactos con Estados Unidos con la finalidad de celebrar un Tratado internacional entre los dos países, pero las condiciones impuestas por Estados Unidos y no aceptadas por el franquismo<sup>59</sup>, derivaron en la firma de un pacto ejecutivo compuesto por tres acuerdos<sup>60</sup>.

## **11.-DEROGACIÓN DE LA LEY DE DEPURACIÓN.**

### **11.1.- Derogación oficial.**

La derogación de la Ley de 10 de febrero de 1939 se produjo de forma oficial el 10 de noviembre de 1966 con la firma del Decreto 2824/1966<sup>61</sup>, donde se concedía el indulto total a todos los funcionarios con sanciones pendientes de cumplimiento

---

<sup>59</sup> Entre estas condiciones se encontraba el indulto de las personas encarceladas por motivos políticos.

<sup>60</sup> Conocidos como los Pactos de Madrid.

<sup>61</sup> Boletín Oficial del Estado núm. 271, de 12 de noviembre de 1966, Decreto 2824/1966 de indulto para extinción definitiva de responsabilidades políticas.

derivadas de la legislación de responsabilidades políticas y de depuración funcional, cualquiera que fuese su clase y Tribunal que la hubiera impuesto.

Como excepción, este Decreto no contemplaba a los funcionarios que se hubieran exiliado durante o después de la Guerra Civil, para éstos el indulto se produjo en 1975<sup>62</sup> cuando se proclamó Rey de España a Juan Carlos I.

### **11.2.- Efectos de la derogación.**

Por lo que se refiere a los resultados de la derogación de la Ley de depuración funcional, hemos de señalar que tuvo múltiples y diferentes consecuencias en función de los afectados por dicha Ley.

En primer lugar, para los funcionarios que aún estaban en disposición de ser readmitidos en su puesto por razón de su edad, se les ofreció dicha opción con todas las prerrogativas que tal alternativa ocasionaba.

Para los empleados que ya estuvieran disfrutando de la jubilación, fue intención del legislador que dichos trabajadores optasen, si lo estimasen oportuno de la prestación que les correspondiese por empleado de la Administración en vez de la que estuviera cobrando por su actividad laboral privada.

También se les propuso a las viudas de los funcionarios que hubieran fallecido durante la vigencia de la Ley, la posibilidad de acogerse a la prestación de viudedad que les correspondiese por causahabiente de funcionario.

## **12.- CONCLUSIONES.**

Una vez perfeccionado el análisis y la estructura argumental, estamos en disposición de extraer una serie de conclusiones que a nuestro criterio resumen lo anteriormente expuesto.

En primer lugar, entendemos que existieron dos periodos claramente diferenciados respecto a todo lo concerniente a la depuración funcional, en primer lugar, la época comprendida entre los años 1936 a 1939, es decir, durante el transcurso de la Guerra Civil española.

---

<sup>62</sup> Boletín Oficial del Estado núm. 284 de 26 de noviembre de 1975. Decreto 2940/1975 de indulto general.

Teniendo en cuenta la situación convulsa y apresurada del momento, tanto la legislación dictada como la forma de implementarla resultaba difusa, motivo por el cual cada Órgano habilitado la ejecutaba como mejor entendía o le interesaba. En este mismo periodo son destacables las circunstancias por la cuales los funcionarios eran obligados en las zonas que habían sido tomadas por los insurrectos a prestar auxilio a éstas bajo pena de ser llevados ante un Tribunal Militar. Al mismo tiempo, al bando sublevado se le suscito el problema de quiénes serían los encargados de instruir y juzgar los expedientes. En definitiva, podríamos considerar esta primera fase del proceso de depuración como un sistema anárquico y desordenado.

A diferencia de los primeros años, una vez asentadas las bases del nuevo Régimen, los mecanismos de depuración se perfeccionaron y con ello, se alcanzaron los objetivos planteados. Entre estos mecanismos se encontraba una profusa legislación que no dejaba posibilidad alguna a los funcionarios de no sufrir los rigores de la depuración. También se delimitaron los diferentes Órganos que serían los encargados de conocer los asuntos que llevaban aparejados dicha depuración, así como las concretas particularidades de los procesos.

Otro punto que ha sido objeto de estudio en este trabajo debido a su importancia, han sido los principales Cuerpos funcionariales sobre los que la depuración actuó con más vehemencia, entre estos colectivos se encontraban, los de jueces, maestros, empleados de Correos y Ferrocarriles, no obstante hemos de señalar que ningún empleado público tanto dependiente del Estado como de la Administración Local quedó dispensado del proceso de depuración.

Cabe destacar, que una mención especial ha tenido en este estudio la mujer funcionaria, la cual experimentó una doble depuración, una por razón de su empleo y otra por su condición de mujer, además también sufrieron la imposición de penas de forma diversa a los funcionarios masculinos, ya que en muchos casos, la misma falta era sancionada de forma más grave por el mero hecho de ser mujer.

En referencia a las consecuencias de la depuración, ha sido nuestra intención ilustrar de la forma más nítida posible las diferentes sanciones a las que eran condenados los funcionarios en función de la gravedad de los hechos que se les imputaban.

Como últimos puntos tratados en este estudio, podemos destacar la importancia que tuvo la revisión de los procesos de depuración para los funcionarios que fueron sancionados en su momento, y la derogación de la Ley de depuración y sus consecuencias. Respecto al primer punto hemos de señalar que hay diferentes versiones sobre los motivos que impulsaron al Régimen franquista a llevarlo a cabo. De una parte hay quienes aseguran que fue debido a un nuevo carácter aperturista del mismo y de otra, que este hecho fue debido a las presiones de terceros países para llegar a acuerdos bilaterales de colaboración. En nuestra opinión, la segunda opción nos merece más certeza debido a que habiendo estudiado las directrices que marcó la dictadura del General Franco, creemos que los actos de aperturismo internacional y el perdón para sus adversarios no estaban recogidos en sus Principios.

Así mismo, la derogación de la referida Ley y sus efectos dieron como resultado la tranquilidad para los trabajadores de poder ejercer su trabajo sin el temor a ser sancionados por otros motivos que no fueran los estrictamente laborales.

Para concluir este estudio hemos de expresar nuestro respeto y recuerdo a todas las personas que tuvieron que vivir y sufrir la referida depuración durante la dictadura franquista por el simple hecho de pensar distinto de un desposta dictador. Resulta inimaginable para alguien que no haya ahondado en el estudio de este periodo, las consecuencias que tuvieron para miles de personas dicha acción por dos motivos principales, el primero, basado en la creencia de que una mente con plena lucidez no es capaz de cometer tantas atrocidades contra sus semejantes y el segundo, asentado afortunadamente en la libertad que en hoy día gozamos.



### **13.- EPÍLOGO.**

Una vez concluido este trabajo, elaborado a través del estudio de la dictadura franquista y la depuración funcional, tenemos la convicción de que con la entrada de la nueva Democracia en España y la proclamación de la Ley de Amnistía de 1977, se intentó hacer olvidar el rencor que aún quedaba entre ambos bandos, y en parte se consiguió, pero también se olvidó a una parte muy importante de las víctimas: Los funcionarios y trabajadores públicos.

Transcurridos los primeros años desde la entrada en vigor de la actual Constitución, se planteó la necesidad de restituir el daño sufrido por las personas de ideología republicana durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, para ello se promulgaron algunas leyes con la finalidad de paliar las penalidades sufridas.

No obstante, esta nueva normativa, a juicio de los partidos de izquierdas resultaba insuficiente, por lo que en junio de 2006, se presentó un Proyecto de Ley que concluyó con la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica. Con esta nueva disposición se entendían cumplidas y satisfechas las pretensiones de los damnificados, pero quedaba una cuestión de la que todos se habían olvidado, las represalias sufridas por los funcionarios y empleados públicos por motivos de la depuración sufrida.

Por este motivo, algunos Ayuntamientos y Asociaciones han impulsado durante estos últimos años varias iniciativas para reclamar al Ministerio de Justicia la expedición de la declaración de reparación y reconocimiento personal de los funcionarios que fueron sancionados y condenados a distintas penas por los Tribunales franquistas por motivos de la Ley de depuración, y por ende también fueron sentenciados por la sociedad al rechazo social.

Así pues, con estas acciones e iniciativas, parece que finalmente, después de más 80 años desde que se inició uno de los acontecimientos más sórdidos y lamentables vividos por los trabajadores públicos en España, la dignidad y el reconocimiento de los grandes olvidados de la dictadura franquista será restablecida.

### 13.-BIBLIOGRAFIA.

- Álvarez, J. (1984). *Burocracia y poder político en el régimen franquista*. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid
- Álvarez, W. (1986). *La represión de la posguerra en León: Depuración de la enseñanza (1936-1943)*. Ed. García. León.
- Amparo, M.P. (2011). *Palabras en azul: aportes para un diccionario falangista*. Ed. Barbarroja. Madrid.
- Archivo histórico ferroviario. (2009). *La depuración del personal ferroviario durante la guerra civil y el franquismo (1936 – 1975)*. Congreso de Historia ferroviaria. Disponible: [http://www.docutren.com/historiaferroviaria/PalmaMallorca2009/pdf/030202\\_AHF.pdf](http://www.docutren.com/historiaferroviaria/PalmaMallorca2009/pdf/030202_AHF.pdf)
- Bastida, F.J. (2014). *El pensamiento político del Tribunal Supremo en la Dictadura franquista*. Ed. Crónicas populares. Madrid.
- Casanova, J. (2001). *La Iglesia de Franco*. Ed. Crítica. Barcelona.
- Cobos, J. (2011). *La vida privada de Franco: Confesiones del monaguillo del Palacio de El Pardo*. Ed. Urano. Barcelona.
- Cuesta, J. (2009). *La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975)*. Ed. Fundación Francisco Largo Caballero. Madrid.
- Dueñas, M.A. (2006). *Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo: la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945)* Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Madrid.
- Espinosa, F. (2014). *Por la religión y la patria*. Ed. Crítica, Barcelona.
- Esteso, M<sup>a</sup> J. (2012). *Niños robados de la represión franquista al negocio* Ed. Diagonal. Barcelona.
- Federación estatal de foros para la memoria. (2012). *Consideraciones generales sobre la depuración franquista*. Disponible en: <http://www.foroporlamemoria.info/2012/01/consideraciones-generales-sobre-la-depuracion-franquista/>
- Hernández, F. (2005). *Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de Prisiones de la Segunda República*. En Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 27, pp. 271-290.
- Hernández, F. (2011) *La prisión militante: las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Herrera, E. (1934). *Educación de una España nueva*. Ediciones Fax. Madrid.
- López, J.R. (2011). *La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra. El proyecto político de Pedro Sainz Rodríguez*. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.

- Nielfa, G. (2003). *Mujeres y hombres en la sociedad franquista: sociedad, economía, política y cultura*. Ed. Complutense. Madrid.
- Otero, L.E. et al. (2006). *La destrucción de la ciencia en España*, Ed. Complutense. Madrid.
- Polo, F. (2015). *La depuración del personal ferroviario durante la guerra civil y el franquismo (1936-1975)*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- Prada, J. (2013). *Franquismo y represión de género en Galicia*. Ed. La catarata. Madrid.

## 14.-ANEXOS

### Documentación jurídica referenciada.

- Ley de Responsabilidades Políticas. Boletín Oficial del Estado núm. 44, de 13/02/1939. páginas 824 a 847. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/044/A00824-00847.pdf>
- Ley fijando normas para la depuración de funcionarios públicos. Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 14/02/1939, páginas 856 a 859. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/045/A00856-00859.pdf>
- Ley de 25 de agosto de 1939 sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados, ex combatientes y ex cautivos. Boletín Oficial del Estado núm. 244 de 01/09/1939, página 4854. Disponible en <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/244/A04854-04856.pdf>
- Ley de bases de Ordenación Ferroviaria y de los transportes por carretera de 24 de enero de 1941. Boletín Oficial del Estado núm. 28, de 28 de enero de 1941, páginas 634 a 643. Disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1941-840>
- Decreto-Ley dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados. Boletín Oficial del Estado núm. 51, de 09/12/1936, páginas 349 a 350. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/051/A00349-00350.pdf>
- Decreto disponiendo de los empleados de la Administración activa del Estado. Gaceta de Madrid núm. 6572, de 20/06/1852, páginas 1 a 2. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1852/6572/A00001-00002.pdf>
- Decreto n.º 101, de la Junta de Defensa Nacional, dictando las reglas a que habrán de sujetarse las presentaciones de empleados públicos que se hallen fuera de su residencia oficial, fijándose las normas que deberán observar las Autoridades y Centros para normalizar la situación de aquellos funcionarios. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 20, de 12/09/1936, página 77. Disponible en <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/020/J00077-00077.pdf>
- Decreto relativo a la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen. Gaceta de Madrid núm. 204, de 22/07/1936, página 770. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/204/B00770-00770.pdf>
- Decreto 2824/2966, de 10 de noviembre, de indulto para extinción definitiva de responsabilidades políticas. Boletín Oficial del Estado núm. 271 de 12 de noviembre de 1966, página 14218. Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/1966/11/12/pdfs/A14218-14219.pdf>
- Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Boletín Oficial del Estado núm. 284 de 26 de noviembre de 1975. Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/1975/11/26/pdfs/A24666>

Orden de 19 de agosto de 1936. Acordando que las escuelas nacionales de instrucción primaria reanuden las enseñanzas el día primero del próximo septiembre. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 9, de 21/08/1936,páginas35a36.Disponible:  
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/009/J00035-00036.pdf>

Orden disponiendo que los alumnos normalistas ingresados mediante examen-oposición con arreglo al plan de 1931 no podrán desempeñar Escuela sin previo expediente de depuración. Boletín Oficial del Estado núm. 194, de 02/05/1937, páginas1221a1222.Disponible:  
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/194/A01221-01222.pdf>

Orden de 02 de marzo de 1939, sobre depuración de funcionarios y empleados de entidades benéficas. Boletín Oficial del Estado núm. 61, página 1213. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/061/A01213-01213.pdf>

Orden de 21 de diciembre de 1951 por la que se dictan normas al objeto de que las Corporaciones locales puedan proceder en determinados casos, a revisar los expedientes de depuración político-social de sus funcionarios. Boletín Oficial del Estado núm. 3 de 3 de enero de 1952. Disponible en <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1952/003/A00028-00029.pdf>

Bando haciendo extensivo a todo el territorio nacional el Estado de Guerra declarado ya en determinadas provincias. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 3, de 30/07/1936, páginas 9 a 10. Disponible en <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/003/J00009-00010.pdf>

Ilmo. Sr.

Con relación a los informes que se piden de Ernesto Fernández Díaz, tengo el honor de comunicar a V.I. lo siguiente:

D. José Campte, industrial, domiciliado en la calle de Jovellanos nº6, manifiesta que conoce a Ernesto Fernández Díaz, por mediación de las hermanas del mismo; que aunque desconoce su actuación durante el dominio rojo, le considera un equivocado en el camino político, incapaz de haber cometido ningún acto delictivo.-- Dice, que su esposa, la de D. José Compte, estuvo detenida por la acusación de ser espía y propagandista de la C.E.D.A. y que a pesar de que Ernesto Fernández sabía que estas acusaciones eran ciertas, en el momento de celebrar el juicio que se instruyó contra dicha señora, dijo que él respondía "con su cabeza" de que eran inciertas esas acusaciones.--

El Sr. Compte está dispuesto a hacer estas manifestaciones ante V.I., o por escrito, si se considera preciso.

Madrid, 26 de abril de 1939

!Año de la Victoria!

El agente, Florencio Hidalgo (Firma y rúbrica)

**Aval**

# GOBIERNO DEL ESTADO

DECRETO NÚMERO 66

## COMISIÓN D. MAGISTERIO

Informe confidencial de D. ....  
Cargo .....

Ayuntamiento ..... Escuela .....

Apellidos ..... Nombre ..... Edad .....  
..... Estado ..... Naturaleza ..... Número  
de hijos ..... Hijos legítimos ..... Bautizados ..... Religión .....  
..... Asistía él a misa ..... Asistía su familia a misa ..... Tiempo que  
lleva residiendo en la localidad ..... Fuera de la escuela, de qué se  
ocupaba .....

Hacia ostentación y propaganda de ideas izquierdistas: detállese .....

Asistía a reuniones ..... De qué clase .....  
Horas que dedicaba a la Escuela ..... Levaba a ella ideas perturbadoras .....  
..... Cual fué su conducta en las clases de  
adultos ..... Se ha cantado la internacional.....  
Cuántas veces ..... Saludaban con el puño ..... Cómo enseñaba: Bien ...  
..... Regular ..... Mal ..... Nada ..... Con entusiasmo ..... Estuvo  
afiliado a algún partido político (Derechas, Frente Popular, Galleguista u otro)...

..... En que  
fecha .....; cuánto tiempo .....  
Cotizaba para alguna asociación o socorro ..... a cual ..... en qué fecha  
..... cuánto tiempo ..... Pertenecía a alguna  
sociedad: Rotario ..... Masón ..... otras ..... Ha sido suspendido de  
empleo y sueldo ..... Ha sufrido alguna detención .....  
Otras observaciones .....

..... de ..... de ..... 1937. FIRMA

**Informe confidencial que tenía que ser cubierto por Cura, Guardia Civil, Alcalde o cualquier otra persona con cargo público.**

Comisión depuradora  
del  
magisterio de .....

**Pliego de cargos** deducidos del expediente de  
depuración seguida a D. ....

.....  
Maestro de ....., Ayuntamiento  
de ....., y al que, con arreglo a lo que  
determina el art. 3º de la Orden de la Presidencia  
de la Junta técnica del Estado, de fecha 10 de  
noviembre de 1936, habrá de contestar,  
documentalmente a ser posible, en el  
improrrogable plazo de diez días, devolviéndolo a  
esta comisión (Dirección del Instituto Nacional  
de 2ª Enseñanza de .....)

PRIMER CARGO.- .....

.....

SEGUNDO CARGO.- .....

.....

TERCER CARGO.- .....

.....

..... de .....de .....1937

El Presidente

**Pliego de cargos**



## DECLARACION JURADA

MINISTERIO DE

Expediente núm.

5379  
184

Trinidad de Dalmases Valls (nombre y apellidos)  
 hijo de Mariano y de Rosa, de 65 años de edad, de esta-  
 do soltero, natural de Barcelona, vecino de Manresa  
 con domicilio en calle Campanas, 16, 1º de  
 profesión Profesor Auxiliar numerario y destinado en Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Manresa  
 juro por Dios y declaro por mi honor, que las contestaciones que se hacen al interrogatorio que a conti-  
 nuación se insertan son conformes a la realidad.

## INTERROGATORIO

- 1.— Fecha de ingreso en el servicio año 1929
- 2.— Ha ascendido con posterioridad al 18 de julio o ha sido recompensado por su actuación.  
 No ascendí, ni por mi actuación se me recompensó. Cuando tantas facilidades había para ser designado catedrático, reagué siempre solicitarme y preferí quedarme en el desempeño de la Auxiliaría numeraria, como antes del 18 de julio.
- 3.— Ha estado afiliado a alguna asociación sindical o partido político de los que integraron el llamado Frente Popular, (indíquese la asociación o partido y la fecha de ingreso en su caso).  
 A la fuerza, para conservar el único medio de subsistencia que me quedaba y cuando ya no pude esperar más, ingresé en la FEDE. Mi ingreso fue en 19 de octubre de 1936, bien distinto del 18 de julio.
- 4.— Qué cargos directivos o delegaciones ha desempeñado en los mismos.  
 Ninguno.
- 5.— Fue interventor o apoderado de algún partido en las elecciones del 16 de febrero de 1936.  
 No.
- 6.— A qué partido representó en las mismas.  
 Ninguno, pues dado mi abstencionismo oficialmente — no obstante que en mi interior todas mis simpatías, y siempre, han sido por las santas tradiciones españolas, que en el decurso de la historia tan grande hicieron a mi madre España — me mantuve a la política ajeno en todo momento.

www.memoria.cat/mestres

Declaración Jurada e informe de actividades laborales y políticas.